



DESASTRES Y SOCIEDAD

Enero-Junio 1995 / No.4 / Año 3

**Especial : Cauca y Huila, Colombia: Junio
1994 – Junio 1995**

REVISTA SEMESTRAL DE LA RED DE ESTUDIOS SOCIALES EN PREVENCION DE
DESASTRES EN AMERICA LATINA

LA RED

Red de Estudios Sociales en Prevención de
Desastres en América Latina

1995

TABLA DE CONTENIDO

CONSTRUYENDO EL RIESGO: TEORÍA SOCIOLOGICA SOBRE LA AMENAZA SÍSMICA.....	3
ROBERT A. STALLINGS**.....	3
<i>Universidad Sur de California</i>	3
LOS LOBBIES DE LA PREVENCIÓN EN E.E. U.U.	3
CONTEXTOS CULTURALES	4
PROCESO	5
PRODUCTO	6
EXPLICACIÓN	8
REFERENCIAS	10

Construyendo el Riesgo: Teoría Sociológica sobre la amenaza sísmica.

Robert A. Stallings**

Universidad del Sur de California

El autor se pregunta cómo una sociedad construye el significado que le asigna a la amenaza sísmica. Considera que, en los Estados Unidos, la amenaza sísmica es "un problema social sólo parcialmente construido". Su construcción, que no es sólo conceptual sino política -es decir, tiene agentes interviniendo- es vista a la luz de las teorías actuales sobre la decisión y sobre las relaciones entre la "percepción" de un problema y el lugar de la estructura social y política desde donde se define su incorporación como tema a la agenda de un país.

LOS LOBBIES DE LA PREVENCIÓN EN E.E. U.U.*

Me permito presentar un aspecto distinto a los que normalmente tratan los investigadores de desastres. En lugar de averiguar la manera en que las sociedades responden a los terremotos o a los *eventos* (antes, durante o después de que ocurran), quisiera preguntar cómo interpreta la sociedad el *significado* que se le asigna a la amenaza sísmica. ¿Qué definición le otorga la sociedad a los terremotos y cuáles son las consecuencias de dicha definición? Tengo especial interés en el tratamiento dado por las instituciones del Estado a la amenaza sísmica. Lamentablemente no estoy en condiciones de ofrecer una teoría completa sobre la amenaza sísmica como un fenómeno social y político. En este momento sólo presento el perfil de una teoría y algunas ilustraciones, más que datos basados en una nación (Estados Unidos).

Mis comentarios serán breves y divididos en cuatro temas: el *contexto cultural*, bajo el cual se define la amenaza sísmica en los Estados Unidos; el *proceso*, que consiste en producir y mantener la definición de terremoto dentro de dicho contexto; el *producto* del proceso de definición; y la *explicación* del estado en que se encuentra la amenaza sísmica en los Estados Unidos. Detrás de mis comentarios existen dos preguntas relacionadas entre sí: ¿Por qué existe tan poca atención y preocupación pública sobre la amenaza sísmica en los Estados Unidos si se le compara con otros peligros? y ¿Por qué, a pesar de la virtual ausencia de demandas de acción, ha surgido tanta actividad gubernamental en favor de esta amenaza durante las últimas dos décadas?

* ponencia presentada en el Décimo Congreso Municipal de Sociología, Comité de Investigación 39, "Teorías sobre desastres", Bielefeld, Alemania, 18 de julio de 1994.

CONTEXTOS CULTURALES

Como es el caso de otras naciones desarrolladas, en los Estados Unidos los terremotos generalmente son vistos como actos de Dios, a diferencia de otras catástrofes que se asocian con acciones humanas. En su libro sobre riesgos, recientemente traducido, Niklas Luhmann (1993) hace una distinción entre el "peligro" y el "riesgo". Según Luhmann, el "riesgo" es un futuro daño vinculado casualmente a una previa decisión humana. El "peligro" es el daño atribuido a un "ambiente" impersonal. Vale decir, es posible tomar una decisión distinta para evitar el riesgo, más no así el peligro. (Luhmann 1993: 21-22). En los Estados Unidos, la amenaza sísmica aún representa un peligro; el público en general interpreta dicha amenaza como un riesgo. Varios investigadores (especialmente Kresp, 1989) han dedicado mucho tiempo a establecer si todavía tiene sentido diferenciar entre una amenaza natural y una tecnológica. Al exterior de la comunidad investigadora, es fundamental establecer la diferencia cultural entre los peligros supuestamente causados por seres humanos y los que no lo son, para definir el trato que reciben las distintas amenazas de parte de la sociedad, así como de la maquinaria estatal.

Las catástrofes que supuestamente son el resultado de desastres causados por la naturaleza más que por la humanidad, son objeto de distintos argumentos públicos. En primer lugar, en los debates se utiliza la retórica de la racionalidad más que la retórica de la moralidad (Best, 1990; ver también Ibarra y Ktsuse, 1993). La atención se centra en las fuerzas seculares. Por otro lado, las amenazas tecnológicas como los accidentes nucleares y los desastres químicos sugieren la presencia de la maldad, según Mary Douglas (Douglas y Wildavsky, 1982). En segundo lugar, las consecuencias de una serie de desastres ocurridos dentro de un período relativamente corto (e.g. el Huracán Andrew, las inundaciones del Río Mississippi y el terremoto de Northridge) son muy distintas a las de una serie de contratiempos ocurridos en una planta nuclear, o las repetidas tragedias que involucran a aviones del mismo tipo como el Boeing 757, por ejemplo (Stallings 1990). Un sistema de fe religiosa podría encontrar un mensaje en el primer punto y culpar al gobierno solamente en relación al segundo punto. Cuando los ciudadanos encuentran fallas gubernamentales en los desastres naturales, las críticas tienden a ser muy selectivas y basadas en ciertos descuidos en la organización, como la falta de ayuda u otro servicio (e.g. Stallings y Quarantelli, 1985; Wolensky, 1983).

En resumen, la capacidad de movilización del pueblo para actuar frente a la amenaza de un terremoto se ve reducida cuando colocamos a los terremotos en el dominio de la naturaleza y no en el de la acción humana. Así, por ejemplo, se desvincula a la amenaza de las decisiones sobre el desarrollo de la tierra. Se evita la creación de un vínculo entre las decisiones presupuestales del gobierno y la amenaza. Se resta importancia a la conexión entre las preferencias del elector y los niveles del riesgo. Una definición naturalista de la amenaza sísmica entre el público en general aumenta la posibilidad de la inactividad política, que muchos expertos definen como "apatía pública".

PROCESO

Hoy en día en los Estados Unidos, la reducción del riesgo sísmico es auspiciada por el gobierno antes que por un movimiento social masivo preocupado por lograr la concientización y un cambio en el comportamiento del pueblo. En términos estructurales, es una especie de red conformada por *burócratas*, que trabajan en entidades gubernamentales, y *tecnócratas*, que mayormente son científicos gubernamentales o investigadores académicos, vinculados unos a otros por intermedio de comités, paneles y talleres. La recaudación de fondos consiste en ejercer presión para conseguir mayores asignaciones presupuestales, en lugar de solicitar donaciones por intermedio de la comunicación telefónica o escrita (los desastres ocasionados por un terremoto brindan una buena oportunidad para recaudar fondos). La contratación de nuevos empleados ocurre a causa de la designación de nuevos puestos en el caso de los burócratas y el cultivo de nuevos intereses en el caso de investigadores académicos. No existen campañas masivas para captar asociados. Como en la mayoría de las coaliciones, el liderazgo es informal, sin ninguna cadena de mando sólida. Los administradores de programas sísmicos en la Federal Emergency Management Agency (FEMA), en el U.S. Geological Survey (USGS) y en las agencias de recaudación de fondos para investigación, como son el Geological Survey y la National Science Foundation (NSF), establecen la orientación del movimiento en el corto plazo. Los objetivos para el largo plazo son establecidos oficialmente por el Presidente, los integrantes de su Gabinete y los legisladores en el Congreso. Sin embargo, en muchos casos importantes directivas políticas son el resultado del trabajo de los comités y paneles del movimiento.

En los Estados Unidos el movimiento encargado de la amenaza sísmica utiliza dos recursos fundamentales. Uno es su base institucional, i.e., la ubicación de las actividades antisísmicas dentro de los presupuestos de varias organizaciones públicas y organizaciones sin fines de lucro. El otro recurso es el juicio de sus integrantes más visibles: los científicos expertos en la tierra. Debido a la naturaleza de este recurso, la estrategia del movimiento ha sido promover el cambio voluntario de las metas establecidas. Sus principales tácticas incluyen el ofrecimiento de recursos económicos sin apoyar la producción y distribución de información técnica. Sus metas varían; las metas federales han sido primordialmente orientadas hacia el Estado y los gobiernos locales, mientras que las metas de los gobiernos locales han sido orientadas hacia los hogares.

Los opositores del movimiento encargado de amenazas sísmicas son tanto visibles como invisibles. Los opositores visibles incluyen a los propietarios de establecimientos comerciales e intereses locales. Los opositores invisibles son los opositores *potenciales*, que son mucho más numerosos e incluyen a ciudadanos comunes que descartan las amenazas sísmicas bajo la presión de lo que ellos consideran preocupaciones más urgentes. Muy poca gente apoya al movimiento, aunque éste ha encontrado algunos "amigos con mucha influencia". Un ejemplo es el anterior alcalde de Los Angeles, Tom Bradley; otro es el parlamentario George Brown de California. El apoyo a medias a veces ocasiona situaciones conflictivas, cuando se utiliza una amenaza sísmica estratégicamente para promover otro objetivo, como la oposición al poder nuclear (por ejemplo, ver Hill, 1992). Una vez que la amenaza sísmica pierde su utilidad, los pseudo-apoyadores pierden interés en la amenaza.

Los integrantes del movimiento operan primordialmente en tres escenarios nacionales: los paneles de expertos y comités organizados bajo el amparo del National Research Council

(Concejo Nacional de Investigación) u otra entidad federal; las audiencias parlamentarias; y los medios nacionales de comunicación masiva. En cada escenario, los tecnócratas y burócratas se dedican a formar la imagen pública de la amenaza sísmica. Estos defensores no necesitan incendiar patrulleros ni organizar huelgas para tener acceso a los encargados de establecer políticas. Lamentablemente, el hecho de tener acceso a ellos es muy distinto a tener influencia sobre los mismos. El movimiento encargado de reducir la amenaza sísmica realmente tiene poco poder político, a pesar de las facilidades que tiene a su disposición.

PRODUCTO

El movimiento ha tenido poco éxito en lo que se refiere a la concientización popular y el cambio en el compartamiento del pueblo respecto a la amenaza sísmica. Esto se debe principalmente a que la imagen de la amenaza que ha promovido refuerza la idea de un acto de la naturaleza sin considerar el accionar humano. A continuación describiré tres aspectos de dicha imagen -las causas de la amenaza, la racionalidad propuesta para combatirla, y las soluciones propuestas.

En casi todos los comentarios de los reclamantes, se han identificado dos causas de amenaza frente a futuros terremotos: la primera, las fuerzas naturales que producen movimientos telúricos, que aunque son necesarias no son suficientes para que exista una amenaza. La segunda causa se expresa en las tendencias sociales impersonales como la "creciente densidad poblacional" y "la demanda de viviendas económicas". La inter-acción entre estos dos factores produce la amenaza de terremoto. Los seres humanos y sus acciones, que en realidad *son* las tendencias, resultan invisibles.

El razonamiento que justifica la acción es el siguiente. No hay duda que ocurrirá un terremoto catastrófico en los Estados Unidos -la cuestión no es "si ocurrirá" sino dónde y cuándo. Debido a las recientes tendencias sociales, sería más devastador que cualquier terremoto ocurrido anteriormente, a no ser que se tomen medidas inmediatas. Las pérdidas económicas serían grandes, pero podrían reducirse. En vista de que existe el reconocimiento de dicha amenaza y que se puede utilizar dicho conocimiento para reducir los costos (así como la pérdida de vidas), no hacer nada resulta una maldad.

La corta lista de soluciones a la amenaza sísmica se ha mantenido estable durante tres décadas. Aunque existen variaciones con respecto a la relativa prioridad de las mismas dentro del movimiento encargado de las amenazas sísmicas, las siguientes son las soluciones propuestas: apoyar la investigación científica y la ingeniería, así como las respuestas sociales y los temas de políticas públicas; mejor planificación y preparación por parte de los gobiernos locales, los hogares y los empleadores; una mayor utilización de la reglamentación sobre el uso de la tierra y códigos de construcción para la mitigación de desastres; cambios en la política federal sobre la ayuda prestada durante desastres para reducir los incentivos con respecto a los riesgos tomados a nivel estatal y local; y desarrollar la capacidad para predecir terremotos.

La imagen del riesgo sísmico tiene varios aspectos relevantes. Por un lado, despersonaliza la amenaza. Tanto las causas como las consecuencias de un futuro terremoto son impersonales. Ni los posibles "culpables" o "víctimas" son identificados individualmente. La probable victimización es compartida igualmente por todos dentro de las zonas oficialmente designadas como de riesgo sísmico. En otras palabras, los terremotos son una amenaza "democrática"

(Fumento, 1990). No existe reclamo alguno sobre la forma en que la estructura social decide el grado de riesgo de cada uno. (cf. Merske, 1986). Las imágenes de fuerzas impersonales sostienen la impresión de que "no se puede hacer nada". Ningún acto legislativo podrá "detener" el desplazamiento repentino de las placas.

El movimiento de amenaza sísmica es consistentemente apolítico. Sus integrantes no exhortan a la gente a votar en contra de los políticos que no apoyan la legislación orientada a reducir amenazas. Tampoco exigen a los votantes que escriban a los Congresistas exhortándolos a votar a favor de la legislación orientada hacia la seguridad sísmica, a pesar de que el sector empresarial siempre exige al Congreso la protección de sus intereses cuando se siente amenazado por las propuestas sobre seguridad sísmica. No exigen pasar medidas sobre bonos que podrían generar fondos para el equipamiento de colegios públicos y aulas universitarias como las Propuestas 1A, 1B y 1C en las elecciones primarias de 1994 en California. Tampoco alientan las acciones legales contra los corredores de bienes raíces que no brindan información sobre riesgos sísmicos a los posibles compradores de viviendas, como lo exige la ley en California. Ni siquiera mencionan la compra de un seguro anti-sísmico.

El mensaje del movimiento al público en general es decididamente voluntarístico. No existen penas por el no cumplimiento. Es un mensaje orientado hacia las familias de clase media, obviando tanto a los ricos como a los pobres. Su aparente intención sería reducir la demanda potencial de servicios de emergencia durante un terremoto, alejando la atención de la estructura del riesgo. Por ejemplo, los programas de preparación sísmica para empresas se orientan a la seguridad del empleado durante un sismo: protegerse debajo de los escritorios, evacuar edificios bajo la dirección de los oficiales de seguridad de la compañía. No se menciona la presión que debería ejercerse sobre los propietarios de edificios para que instalen una capa protectora que minimice los daños que ocasionaría la posible rotura de vidrios, o para que los supervisores organicen -o remplacen, en caso necesario- los muebles y adornos de la oficina.

La amenaza sísmica ha sido promovida por el movimiento como una condición futura que todavía no existe. La destrucción que causaría un futuro sismo catastrófico todavía no ha ocurrido. Aunque la fuerza puede estarse acumulando en la tierra y los edificios que se desplomarían ya existen, el daño es parte del futuro y no del presente. Si no existe un vínculo entre el presente y el futuro, al público en general se le hace difícil vincular al factor riesgo con las condiciones y actividades existentes. La obsesión por las predicciones sísmicas -el deseo de saber cuando ocurrirá "El Gran Terremoto"- perpetúa esta orientación futura. La ubicación del riesgo en el presente debilitaría aún más la idea de que supuestamente no hay nada que hacer. Al igual que fumar, tener malas costumbres alimenticias, falta de ejercicio o estar expuesto a 'asbestos', ubicar al riesgo sísmico en el presente vincularía al presente con el futuro.

Actualmente la mejor manera de describir la amenaza sísmica en los Estados Unidos es considerarla como un *problema social parcialmente construido*. Al igual que el crimen organizado de los años sesenta y los crímenes de empleados de oficina de los años ochenta, dicha amenaza puede ser una preocupación para los integrantes del movimiento, mas no para la gente al exterior del mismo. Esta conclusión no se basa en la falta de actividad del movimiento, sino en el producto de dicha actividad. El movimiento no ha logrado crear un interés público en los sismos que pueda competir con otros serios problemas sociales, como

son el abuso de los niños, accidentes causados por conductores en estado etílico, y los crímenes callejeros. Los integrantes del movimiento no se han visto obligados a crear un conflicto público para provocar el reconocimiento y la acción oficial, porque tienen mayor acceso a las instituciones gubernamentales que otros grupos. Por no "salir a la calle", no han podido desarrollar el apoyo popular.

EXPLICACIÓN

Casi todas las actividades a favor de la amenaza sísmica han sido realizadas por funcionarios gubernamentales y científicos contratados por el gobierno (e.g. el U.S. Geological Survey), o por universidades que reciben apoyo del gobierno para la investigación. Asimismo, los programas para promover el riesgo sísmico se han desarrollado con fondos del gobierno federal. ¿Cómo se puede explicar el manejo estatal de la amenaza sísmica en los Estados Unidos? Existen dos tipos de explicaciones: las teorías centradas en la sociedad y las teorías centradas en el Estado. Las teorías centradas en la sociedad sostienen que las fuerzas que determinan la actividad gubernamental residen *al exterior* del Estado. Estas teorías difieren en dónde se ubican tales fuerzas en la estructura social. Algunos piensan que las políticas gubernamentales son manejadas por un grupo selecto de líderes de grandes empresas (e.g. Useem, 1984). Otros están de acuerdo en que el gobierno está dirigido por un grupo de elite de una clase privilegiada y muy adinerada cuya base no está directamente ligada a ningún interés empresarial específico (Domhoff, 1983, 1990). También existen aquellos que argumentan que la política gubernamental está dirigida por una mayoría relativa y no por un pequeño grupo selecto (e.g. Dahl, 1982). Las teorías centradas en el Estado consideran que las entidades gubernamentales juegan un papel activo en el establecimiento de políticas en lugar de ser instrumentos pasivos controlados ya sea por un grupo elite o grupos de interés público (e.g. Weber, 1978; Skocpol, 1979; Block, 1981). Se considera que el aparato administrativo del Estado -o sea la burocracia pública- tiene suficiente autonomía y poder como para orientar sus propios programas.

En los Estados Unidos la carrera de la amenaza sísmica sugiere poco que encaje en la variante de elite o en la popular de la teoría centrada en la sociedad. La teoría pluralista, a través de los debates públicos y discusiones, podría haber pronosticado un consenso entre los distintos grupos interesados en la amenaza sísmica, que podrían haber sido convertidos por los funcionarios elegidos en actividades y programas públicos. La "voluntad del público" sería expresada como política gubernamental. Independientemente de los méritos generales de la teoría sobre intereses mayoritarios, en el caso específico de la amenaza sísmica no existe evidencia de que un aumento en las actividades para reducir el peligro sísmico en los años setenta fuera el producto de un aumento del interés público. No se llevó a cabo ningún debate público sobre el creciente peligro de la amenaza sísmica. No se realizaron actividades populares en todo el país para llamar la atención sobre los peligros recién descubiertos. Los políticos no sintieron la creciente inquietud entre los electores con respecto a la lentitud del gobierno en cuanto al tratamiento de problemas sísmicos.

Es más difícil evaluar la aplicabilidad de las teorías sobre grupos elites. Los grupos elite casi siempre permanecen en el transfondo y utilizan su acceso directo a los que hacen las políticas para ejercer su influencia, sin atraer la atención pública. Es muy posible que en los años setenta

ocurrieran más cosas a puertas cerradas de lo que nosotros -incluyendo los investigadores-sabemos. Sin embargo, en base a la información públicamente disponible, no existe evidencia para apoyar la hipótesis que sostiene que el aumento de las actividades relacionadas a los sismos fueron dirigidas por los intereses de un selecto grupo de empresarios. Los "capitanes de la industria" no ofrecieron discursos públicos sobre el riesgo sísmico. Los grupos de expertos apoyados por los empresarios no redactaron documentos e informes sobre el tema. En los años ochenta la industria de seguros de accidentes y propiedades se unieron para oponerse a cualquier acción parlamentaria que pudiese dañar sus intereses en nombre de la mitigación del peligro sísmico. Sin embargo, en general el grupo selecto de empresarios mantuvo silencio con respecto al tema sísmico.

Por otro lado, no existe evidencia alguna de que la amenaza sísmica haya sido motivo de preocupación entre la clase alta. Es posible que los super-ricos que residen en zonas designadas como sísmicamente activas tengan abundantes recursos que hagan que el riesgo sísmico sea menos evidente para ellos que para el público en general. Ellos viven en hogares unifamiliares, que son las viviendas más seguras. Muchos poseen viviendas en más de un lugar. Su riqueza les permite contratar ingenieros y consultores para diseñar y equipar la propiedad que habitan y contratar el seguro necesario. Además, tienen los conocimientos y el poder político para "trabajar el sistema" en caso de un desastre. Sea como fuere, durante los años setenta la clase alta no demostró interés alguno en las políticas y programas sísmicos del gobierno.

La carrera de la amenaza sísmica no tiene sentido en lo que se refiere a las teorías centradas en el Estado. Dichas teorías se basan en que los funcionarios estatales de alto nivel actúan independientemente sobre los grandes intereses de la economía capitalista y estatal. El Estado tiene su propio interés en mantener y mejorar el desarrollo de la economía. Tiene suficiente autonomía para ser más que un instrumento de una clase dominante o de un grupo de empresarios selectos. Muchas veces el Estado realiza acciones a las cuales los grupos selectos se oponen porque no satisfacen sus preocupaciones inmediatas. El argumento de los que apoyan la teoría centrada en el Estado es que acciones de este tipo se realizan a favor de los intereses de largo plazo de la política económica en su integridad.

Existe una sola explicación de las teorías centradas en el Estado que concuerda con la carrera de la amenaza sísmica. Los esfuerzos auspiciados por el gobierno para crear conciencia sobre el riesgo sísmico en particular y los peligros naturales en general, son explicados por un Estado autónomo cuyos directores están tomando las medidas necesarias para asegurar la estabilidad de una democracia capitalista. Esta simple frase sirve para descartar la hipótesis. Ni "El Gran Terremoto" ni las crecientes pérdidas anuales serían capaces de destruir la economía estadounidense ni causar el colapso del gobierno. Sin embargo, directores estatales temen que los efectos económicos de un terremoto catastrófico -simbolizado como "El Gran Terremoto"- puedan debilitar la poca robusta economía de la nación y en consecuencia, su papel como el único poder mundial que queda. A pesar de que se ha determinado la existencia de una serie de graves amenazas en el 80 por ciento de los estados, se sigue prestando mayor atención a California debido a la influencia de ese estado en la economía nacional. Los daños causados a la economía de California causarían daños en la economía de la nación. Un congresista de California estima que la ocurrencia de "El Gran Terremoto" tendría como resultado inmediato una reducción del 5% del Producto Bruto Interno (PBI) de los Estados Unidos (Congresista

George Brown, citado en Palm *et al*, 1990: 7-8). Algunos consideran que las consecuencias de largo plazo persistirían unos diez años. Los daños causados a la economía nacional también causarían daños en la posición política y económica de la nación dentro del nuevo orden mundial.

La explicación de las actividades auspiciadas por el gobierno a favor de la amenaza sísmica es similar a la explicación dada sobre las políticas de bienestar social en los Estados Unidos. Las teorías centradas en el Estado consideran que las políticas de bienestar social actúan como válvulas de seguridad frente a los disturbios económicos y laborales (e.g. Quadagno, 1984). Son una especie de póliza de seguro que reduce la posibilidad de las amenazas contra la estabilidad política. En consecuencia, la recaudación de fondos para los programas de bienestar social de la nación se realiza de acuerdo a las necesidades, evitando así la perturbación del orden público. La explicación sobre la carrera de la amenaza sísmica es igual a la explicación sobre las políticas de bienestar social. Los funcionarios estatales, especialmente los funcionarios federales de alto rango, actúan a favor de la política económica estadounidense en su integridad, financiando programas para reducir el peligro sísmico. Ni el público en general ni los grupos económicos selectos han exigido dichos programas. Es necesario que la reducción de riesgos sísmicos sea una actividad auspiciada por el Estado, para proteger al país de la posible inestabilidad política que ocasionaría un cambio desfavorable en la coyuntura económica a causa de un terremoto catastrófico. Sin embargo, el costo de este tipo de protección no debe ser demasiado alto, para evitar que la cura sea peor que la enfermedad. Manteniendo la calma entre el público en general, es posible reducir la posibilidad de que el público exija alternativas costosas. La protección siempre debe adquirirse a un precio aceptable.

REFERENCIAS

BEST, JOEL (1990) *Threatened Children: Rhetoric and Concern about Child-Victims*. University of Chicago Press, Chicago.

BLOCK, FRED (1981) "Beyond Relative Autonomy: State Managers as Historical Subjects." *New Political Science* 2: 33-49.

DAHL, ROBERT A. (1982) *Dilemmas of Pluralist Democracy*. Yale University Press, New Haven, Connecticut.

DOMHOFF, G. WILLIAM (1983) *Who Rules America Now?: A View for the '80s*. Simon and Schuster, New York.

----- (1990) *The Power Elite and the State*. Aldine de Gruyter, New York.

DOUGLAS, MARY (1966) *Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*. Praeger, New York.

----- Y AARON WILDAVSKY (1982) Risk and Culture: An Essay on the Selection of Technological and Environmental Dangers. University of California Press, Berkeley.

FUMENTO, MICHAEL (1990) The Myth of Heterosexual AIDS. Basic Books, New York.

HILL, STUART (1992) Democratic Values and Technological Choices. Stanford University Press, Stanford.

IBARRA, PETER Y JOHN KITSUSE (1993) "Vernacular Constituents of Moral Discourse: An Interactionist Proposal for the Study of Social Problems." En: J. A. HOLSTEIN Y G. MILLER, ed., Reconsidering Social Constructionism: Debates in Social Problems Theory. Aldine de Gruyter, New York.

KREPS, GARY (1989) "Future Directions in Disaster Research: The Role of Taxonomy." International Journal of Mass Emergencies and Disasters 7: 215-241.

LUHMANN, NIKLAS (1993) Risk: A Sociological Theory. Aldine de Gruyter, New York.

MARSKE, CHARLES (1986) "A Community of Fate: The Political-Economics of Risk in College Athletic Travel." Journal of Sport and Social Issues 10:6-26.

PALM, RISA, MICHAEL HODGSON, DENISE BLANCHARD Y DONALD LYONS (1990) Earthquake Insurance in California: Environmental Policy and Individual Decision Making. Westview Press, Boulder, Colorado.

QUADAGNO, JILL (1984) "Welfare Capitalism and the Social Security Act of 1935." American Sociological Review 49: 632-647.

SKOCPOL, THEDA (1979) States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China. Cambridge University Press, New York.

STALLINGS, ROBERT (1990) "Media Discourse and the Reconstruction of Risk: U. S. Newspaper Coverage of Major Airline Disasters." Ponencia presentada en el Décimosegundo Congreso de Sociología, Madrid.

----- y E. QUARANTELLI (1985) "Emergent Citizen Groups and Emergency Management." PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW 45:93-100.

USEEM, MICHAEL (1984) The Inner Circle: Large Corporations and the Rise of Business Political Activity in the U. S. and the U. K. Oxford University Press, New York.

WEBER, MAX (1978) *Economy and Society*. Vol. 2, editado por Guenther Roth y Claus Wittich, University of California Press, Berkeley.

WOLENSKY, ROBERT (1983) "Power Structure and Group Mobilization Following Disaster: A Case Study." *Social Science Quarterly* 64: 96-110.